

MARCO GUTIÉRREZ V.

La relación entre el Gobierno y el sector privado sigue tensa. La tirantez ya había subido antes de la realización de Enade, a fines de abril, tras dichos del Presidente Gabriel Boric como el “más Narbona, menos Craig”. Luego, siguió por las críticas del mandatario al discurso del timonel de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, en dicho encuentro empresarial. Asimismo, tildar de “coñetes” a los bancos no ayudó a calmar los ánimos.

Ahora la tensión entre el Ejecutivo y las empresas está ligada a la paralización que afecta a Puerto Coronel desde hace más de 50 días, debido al bloqueo que lideran trabajadores eventuales que se han opuesto a medidas como políticas de control de alcohol y drogas. También mantienen rencillas con la nueva administración del terminal, que incluso están en tribunales (ver recuadro). Este evento ha generado millonarios perjuicios a la economía de la Región del Biobío, afectando la actividad de compañías de varios sectores.

Ayer en la mañana, mientras se conocía que el Gobierno designó al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para intentar un acercamiento entre la empresa y los trabajadores movilizadas, también se esparcían las declaraciones —en Tele 13 Radio— del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, cuestionando decisiones de Puerto Coronel y atribuyéndole responsabilidad en la paralización. Tras ello, surgieron diversas respuestas de los gremios y compañías.

Previamente, el martes pasado, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, había llamado a la compañía a “buscar soluciones” al conflicto, pese a que el puerto y gremios empresariales venían solicitado desde hace días al Gobierno garantizar el orden público para que las movilizaciones no siguieran golpeando el comercio exterior y la logística en esa región, y los trabajadores permanentes pudieran ingresar al recinto portuario.

Dardos a la empresa

En su intervención radial, Monsalve defendió los esfuerzos realizados por el Gobierno para buscar una solución al conflicto, pero también aludió a acciones del puerto que generaron reacciones de los trabajadores movilizadas. En ese sentido, mencionó las modificaciones en el acuerdo con los operarios en cuanto la política de drogas y alcohol, cambios en el sistema de “nombreadas” y la reducción de turnos de los eventuales.

Monsalve afirmó que Puerto Coronel “tomó decisiones que generaron un conflicto con sus trabajadores, con los trabajadores eventuales. Y yo creo que también es importante que las empresas midan las consecuencias de sus decisiones”.

Aludiendo al gerente general de la compañía, Patricio Román,

Subsecretario del Interior cuestionó decisiones de la firma ligadas a trabajadores eventuales

Puerto Coronel: dichos de Monsalve sobre culpa de la compañía en el conflicto elevan tensión con empresas



Los muelles reflejaban ayer la paralización del movimiento de carga. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, manifestó su preocupación por el impacto del paro sobre la cadena logística y exportaciones.

señaló que “tampoco nos sirve un gerente que no resuelva problemas, y que no solo genera un problema dentro de la empresa, sino que le genera un problema a la región y a las otras empresas”. Añadió que “esto de generar la idea de que la empresa ha hecho todo bien, y que es el Gobierno el que ha hecho las cosas mal, es una idea falsa, porque la empresa también ha tomado decisiones que han creado un conflicto que no ha sido capaz de manejar”.

Las declaraciones del subsecretario ocurrieron cuando el Presidente Gabriel Boric señalaba ayer en un evento de Clapes UC que era necesario mejorar la relación y el clima de confianza entre el sector público y el privado (ver C 2).

Puerto contesta

Puerto Coronel, ligado a Arauco (forestal del Grupo Angelini) y Neltume Ports (relacionada con los Von Appen), manifestó su “preocupación por varias aseveraciones del subsecretario Manuel Monsalve, a quien quizá no se ha informado debidamente sobre lo que está ocurriendo en el terminal”. La empresa afirmó que “no ha generado el problema que la afecta; al contrario, ha hecho esfuerzos en todo orden de



cosas para hacerse cargo de manera responsable de graves perturbaciones que están afectando su operación. La administración de la compañía está poniendo fin a una serie de malas prácticas que arriesgan la seguridad de los trabajadores, favorecen el ‘amiguismo’ y dañan el funcionamiento general del puerto”.

La firma añadió que “los accesos al puerto siguen obstruidos desde la vía pública (no desde el interior del puerto), a vista y presencia de dotación policial que, esporádicamente, se ha he-

cho presente, quienes no han intervenido para desbloquearlos por instrucciones específicas de la delegación presidencial. No existe, por cierto, ninguna presencia policial de punto fijo”, contradiciendo así lo señalado por el subsecretario. El terminal recordó que los trabajadores permanentes, que son del orden de 550 personas y un número similar de contratistas, quieren volver a trabajar. Los primeros presentaron acciones legales para solicitar el desbloqueo del puerto.

Gremios reaccionan

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, enfatizó que “el Estado y el Gobierno en particular deben garantizar el libre acceso a las faenas”. Sobre los dichos de Monsalve aludiendo a decisiones del puerto respecto de trabajadores eventuales, indicó que las medidas “muchas veces pueden ser complejas, y en eso el subsecretario tiene razón, hay decisiones que son complejas. Pero no puede pasar que se les impida a los trabajadores, a los gerentes, acceder a las instalaciones de su empresa”.

La Sofopa indicó que en relación con las declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve, el gremio “expresa su preocupación por la omisión a la preocupante situación de orden público que persiste en el puerto e infraestructura crítica aledaña, rol que es indelegable por el Estado. La situación en Puerto Coronel hoy es crítica y tiene impacto en la imagen país, afecta el derecho de propiedad y de la empresa a se-

Las fichas al técnico conciliador

En el sector empresarial esperan que el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, pueda avanzar en una solución al conflicto de Puerto Coronel. Hoy viaja a la zona, donde se reunirá con la empresa y los trabajadores movilizadas. Destacan el perfil conciliador y técnico de este ingeniero civil industrial de la UC, con un máster y doctorado en la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. En contra, dicen, le juega su escasa experiencia política y en grandes crisis portuarias.

Muñoz arriba al Biobío tras las polémicas declaraciones del subsecretario Manuel Monsalve, hombre nacido en Coronel, médico cirujano, miembro del Partido Socialista, quien posee una amplia trayectoria política. Fue diputado representando a la Región del Biobío. En el rubro portuario lo señalan como más confrontacional.

Desde el pasado 26 de marzo, trabajadores eventuales bloqueado el Puerto de Coronel. Ayer los portones exhibían los carteles pegados por los manifestantes. No había patrullas de carabineros.

guir operando”. El presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, manifestó que “la gestión y administración interna corresponden a la empresa, pero la seguridad pública y garantizar los derechos civiles al Gobierno”. Recordó que los trabajadores que han bloqueado el puerto “han saboteado también la línea del ferrocarril, infraestructura crítica para industrias estratégicas, obstruyendo el ingreso y salida de mercancías. Expuestos así los hechos, no cabe duda a quién corresponde enfrentar de manera ineludible”.

David Fernández, gerente general de la empresa ferroviaria Fepasa, hizo un llamado a las autoridades responsables de la seguridad pública y de transportes “para que nos apoyen en retomar la continuidad operacional”. La firma dijo que en los últimos 50 días solo ha logrado circular dos trenes, con la protección de Carabineros, sin poder mover convoyes que transportan químicos para la producción de celulosa, debido al riesgo que puede implicar la intervención de los manifestantes sobre la carga, “viendo afectada la entrega de insumos para el proyecto MAPA (de Arauco)”.

El presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez, manifestó que “este paro es un nuevo golpe a la estabilidad económica de la Región del Biobío, que podría tener graves consecuencias para los exportadores nacionales, pero también porque genera incertidumbre y pérdidas de contratos con los compradores internacionales, poniendo en tela de juicio la seriedad y capacidad de resolución de conflictos. Pero también afecta el orden público y seguridad de trabajadores y contratistas”.

Los hechos de corrupción que destapó la actual gerencia

En el sector portuario no recuerdan una paralización tan extensa y de un impacto económico tan severo como la actual crisis en Puerto Coronel. Señalan que antes de esto, la actividad portuaria en la zona se desarrollaba con fluidez.

El problema actual ocurre en medio de una pugna entre la administración que lidera el gerente general, Patricio Román —nombreado en el cargo en noviembre de 2023— y líderes de trabajadores eventuales, pelea que también se vive en tribunales. La gerencia del puerto presentó una querrela criminal contra el expresidente de Puerto Coronel (Eduardo Hartwig) y el exgerente general (Javier Anwandter), el ejecutivo

Víctor Olivares y el empresario Héctor Romero (hermano del diputado Leonidas Romero) por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, apropiación indebida y administración desleal. Ahí se describen pagos irregulares al alcalde de Coronel, Boris Chamorro, al concejal Eduardo Araya y a los dirigentes de sindicatos de trabajadores eventuales Raúl Cabezas, Guillermo Jaque, Miguel Concha, David Guerrero, Tomás Soto y Luis Rojas.

El 20 de marzo fue acogida a trámite la querrela y el 23 de ese mes empezaron las movilizaciones en el puerto —aludiendo a medidas de política de alcohol y drogas—, siendo bloqueado tres días después.